
Argentina: cuando el uno a uno no es empate

Gustavo Gamallo*

Para la larga tradición futbolera argentina el uno a uno es un empate. Sin embargo, durante una década y hasta hace pocos días el uno a uno fue sinónimo del precio del dólar en la moneda nacional: ilusión de un país con una economía débil y una moneda poderosa, cuyo resultado no es precisamente un empate. Pocos ganadores y muchos perdedores se distinguen nítidamente en una sociedad que dejó de ser lo que fue.

En este artículo se presentan algunos antecedentes de este proceso, una descripción del proyecto neoliberal de los noventa, la agonía del esquema y algunas claves arbitrarias y caprichosas para interpretar una historia en pleno desarrollo.

Algunos antecedentes

Las grandes transformaciones que impulsaron la transición hacia un nuevo régimen de acumulación comenzaron con el proyecto de la dictadura militar en 1976. Su tarea fundamental fue la ruptura de las bases políticas, económicas, sociales y culturales de la coali-

ción que sostuvo el proceso de acumulación basado en la expansión de un mercado interno protegido (con sus vaivenes y oscilaciones en un largo periodo de inestabilidad política y caos económico), con el desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones, con una elevada intervención estatal y niveles crecientes de inclusión y protección social.

El primer gobierno de la democracia recuperada, encabezado por Alfonsín de la Unión Cívica Radical (UCR), se prodigó en consolidar el sistema democrático, pero no continuó la tarea de reformar un capitalismo protegido, ineficiente y subsidiado. La hiperinflación de 1989, manifestación de la puja irresoluta entre los distintos grupos, marcó el fin de la experiencia fracasada de un ajuste y una reconversión por la vía heterodoxa. El gobierno del presidente Menem cerró la labor trunca del gobierno militar en términos de ordenar un nuevo régimen social de acumulación y un nuevo patrón de hegemonía.

La década menemista (1989-1999)

El régimen menemista rompió la recurrente falta de imbricación entre los sectores económicamente dominantes y la legitimación política democrática, pues articuló un bloque histórico donde estaban expresados los intereses de aquellos y, a la vez, estaban representados los sectores sociales bajos y medios bajos (el tradicional electorado del Partido Justicialista -PJ-).

Menem puso en marcha un agresivo pro-

* Sociólogo. Docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Nordeste. Hasta diciembre de 2001 se desempeñó como Director del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.

grama económico neoliberal, caracterizado por la liberalización del comercio exterior y la circulación de capitales externos, la desregulación de mercados (en especial el financiero), el traspaso de monopolios públicos a manos privadas y la introducción de la convertibilidad cambiaria que mantuvo fija la paridad con el dólar, lo que vinculó la base monetaria a las reservas internacionales y excluyó el financiamiento monetario del déficit fiscal. La puesta en marcha del llamado Plan de Convertibilidad permitió estabilizar los precios de la economía (en 1991, el índice de precios al consumidor aumentó un 84%, en 1995 un 1,6% y en 1996 un 0,1%), recuperar el crédito, elevar el nivel de consumo de todos los grupos sociales y aumentar significativamente el producto interno bruto (aproximadamente un 40% entre 1991 y 1997).

La economía se abrió a los mercados mundiales. Aumentó el ingreso de capitales (entre 1991 y 1994 ingresaron casi 45.000 millones de dólares), se incrementó el monto de las importaciones y de las exportaciones y se extranjerizaron numerosas empresas nacionales. La apertura elevó el déficit comercial que se resolvió a partir del ingreso de capitales externos. La nueva disciplina fiscal originó un considerable aumento del endeudamiento externo, estimado para 1998 en el orden de los 140.000 millones de dólares.

El Estado fue objeto de profundas reformas:

a) El desmantelamiento del aparato keynesiano mediante la venta y/o concesión de la propiedad y/o control de las empresas federales de provisión de servicios de energía eléctrica, telefonía, gas, petróleo, televisión, rutas y carreteras, aeronavegación comercial, aeropuertos, agua corriente y cloacas, etc. La privatización involucró a más de 120 empresas públicas y, en consecuencia, se redujo la función económica del estado: el gasto público en infraestructura económica y subsidios a la actividad privada bajó de 7,60% del PIB en 1980 a 1,98% en 1997.

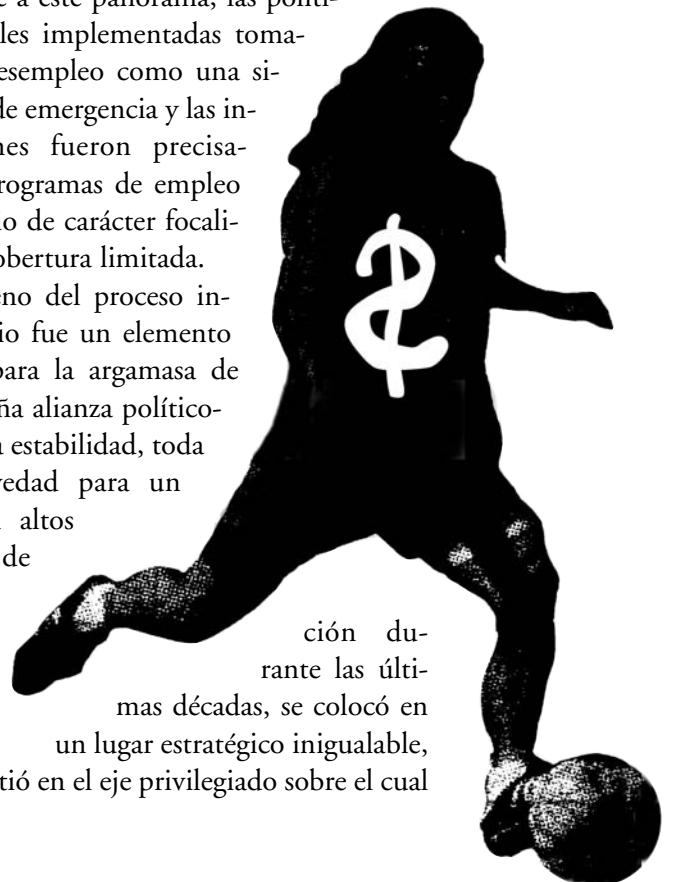
- b) La descentralización hacia las provincias de los servicios sociales, especialmente los de educación inicial y media y de la atención hospitalaria. Actualmente el 50% del gasto público social está en manos de provincias y municipios.
- c) La desregulación de actividades públicas que estaban excluidas para la operación de los grupos particulares, en especial el sistema previsional con la incorporación de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión.

Pese a la estabilidad y al crecimiento, los sectores populares fueron agredidos. La tasa de desempleo superó todas sus marcas históricas: en 1993 saltó la barrera del 10% y se ubicó posteriormente por encima del 15%. La distribución del ingreso empeoró notablemente: la razón del décimo decil de ingreso sobre el primero en el Gran Buenos Aires pasó del 16,6% en 1991 al 28,6% en 1999. La incidencia de la pobreza, que en los primeros años de la estabilidad descendió, a partir de 1995 se ubicó por encima del 25% de la población en el Gran Buenos Aires.

Frente a este panorama, las políticas sociales implementadas tomaron al desempleo como una situación de emergencia y las innovaciones fueron precisamente programas de empleo transitorio de carácter focalizado y cobertura limitada.

El freno del proceso inflacionario fue un elemento central para la argamasa de esa extraña alianza político-social. La estabilidad, toda una novedad para un país con altos índices de

inflación durante las últimas décadas, se colocó en un lugar estratégico inigualable, se convirtió en el eje privilegiado sobre el cual



el discurso oficial encontró una posibilidad de generalización y convocatoria, y significó un enunciado efectivo y rentable electoralmente que pudo interpelar con éxito a una sociedad cada vez más dualizada. La estabilidad en los precios y la fantasía de un dólar barato escondió las disfuncionalidades fiscales, de competitividad, de endeudamiento y del mercado de trabajo.

Otro rasgo del gobierno de Menem fue el deterioro del sistema institucional mediante la asunción de facultades de orden legislativo por el poder ejecutivo y la cooptación de la cúspide de la justicia. A su vez, elevados niveles de corrupción se verificaron en el orden político de la administración, en un escenario de movilización de recursos en virtud del proceso de privatización. Hubo quien calificó al régimen menemista como una verdadera “cleptocracia”.

Dadas las decisivas transformaciones en el funcionamiento del estado (que se desprendió de sus intervenciones económicas), en la dinámica económica (a partir de la profunda liberalización y desregulación de los mercados, la consolidación de las posiciones de los grupos concentrados locales y transnacionales y el retroceso de la industria nacional) y en la organización de la sociedad (con la reorganización de los mercados de trabajo y la aparición de amplios colectivos marginados del sistema productivo), esta etapa puede considerarse como una refundación de la sociedad argentina.

La agonía de la convertibilidad: el gobierno de De la Rúa (1999-2001)

El triunfo de la Alianza encabezado por el radical De la Rúa apeló al rescate de los valores republicanos sepultados por el menemismo, entregó tibias promesas sobre la deuda social, pero su mensaje económico presentaba elementos de continuidad. El entonces candidato decía: “conmigo un dólar = un peso”.

La paridad monetaria era un corsé para la economía argentina. Los precios, las tarifas de los servicios públicos y las deudas personales

y empresarias dolarizadas eran la medida de las reservas que se expresaban ante la menor amenaza de devaluación, pues había temor ante la multiplicación de las obligaciones financieras y al retorno de la inflación. En la vereda opuesta, la industria nacional perdía competitividad en los mercados externos y el proceso de deflación interna había alcanzado su techo. El estancamiento de la economía comenzó en el último trimestre de 1998 y desde ese momento la situación fue empeorando progresivamente. En ese contexto, la salida de la crisis se planteó como una puja entre quienes pretendían profundizar la convertibilidad hacia la completa dolarización monetaria y quienes consideraban que la convertibilidad estaba terminada y era necesario devaluar el peso.

El margen de acción del gobierno aliancista fue estrecho: conflictos internos en la coalición desembocaron en la renuncia del entonces vicepresidente Álvarez, líder de la segunda fuerza de la Alianza; desavenencias entre el presidente y su propio partido, que no se sentía reflejado por la administración; una leve mayoría en la Cámara de Diputados, minoría en el Senado, y la mayor parte de las provincias en manos del PJ; y, fundamentalmente, un estilo de gestión dominado por la incapacidad para llevar adelante cualquier iniciativa (que contrastaba fuertemente con el autoritarismo eficaz de Menem) construyeron la imagen de un gobierno poco confiable para liderar una salida a la crisis. Pocos errores se pagan más caros que la ineficacia, y de esos la Alianza abusó. En todas las decisiones económicas, algunas muy impopulares como la disminución del monto de las jubilaciones y de los salarios de los empleados estatales, intentó sostener la convertibilidad, con poco éxito, mientras continuaba la caída de la actividad económica, del nivel del empleo, de la recaudación fiscal. El cierre del crédito internacional llevó a una crisis presupuestaria aguda y al *default* con los acreedores internos y externos.

La administración De la Rúa no tuvo voluntad política para sobreponerse al esquema cambiario agotado y no advirtió las eviden-

cias del fin de una época: una economía paralizada que las iniciativas propias no modificaron; una enorme deuda social, que incrementó la conflictividad; un elevado déficit fiscal, con un creciente peso de los servicios de la deuda, que condicionaba la acción del estado; la desconfianza de los centros financieros internacionales, que transformaron a la Argentina del *star pupil* de los noventa al país que encabeza desde hace varios meses la tabla del índice del riesgo-país.

Renuncia presidencial, fin de la convertibilidad y algunos elementos para una interpretación

1. La renuncia de De la Rúa del 20 de diciembre presenta varios determinantes: a) la negación de la derrota en las elecciones legislativas de octubre de 2001 donde triunfó el PJ; dado el récord de abstención y voto en blanco alcanzado, el gobierno intentó transformar el “perdimos” en un “perdimos todos”; b) la crisis de legitimidad del gobierno pocas veces vista en un periodo tan corto; c) la ineficacia para resolver la recesión y la tozudez del presidente al ratificar el rumbo económico en el momento en que existieron condiciones para una concertación entre los distintos sectores políticos y sociales para una salida a la crisis, en especial frente al creciente malhumor colectivo por las decisiones de fines de noviembre para sostener el sistema financiero ante la enorme fuga de depósitos; d) la zancadilla institucional del PJ durante el 2001: pedidos de renuncia en la voz de altos dirigentes sindicales, la solicitud del gobernador de Buenos Aires señalando su disposición a hacerse cargo del gobierno, la elección del senador Puerta como Presidente Provisional del Senado (primero en la línea de sucesión ante la ausencia de vicepresidente) y, finalmente, la cuestionable prescindencia frente a los acontecimientos del 20 de diciembre, donde todo el PJ se instaló en el interior

del país observando como la Plaza de Mayo era el escenario de una violenta represión con el saldo de varios muertos, mientras el presidente los convocaba en un gesto desesperado a constituir un nuevo gabinete y a discutir un programa de acción. ¿Fue inevitable la renuncia presidencial? ¿Existió espacio para la formación de un nuevo gobierno con el consenso de la oposición y con el mantenimiento del presidente electo? Son inútiles las preguntas contrafactuales pero al menos valen dos comentarios adicionales: a) la incapacidad del sistema presidencialista argentino para soportar una crisis política y reaccionar frente a una nueva mayoría parlamentaria, y b) la capacidad extraordinaria de extorsión y chantaje político del PJ en la oposición.

2. La sucesión de De la Rúa fue un espectáculo patético. Entre el 21 de diciembre y el 2 de enero Argentina tuvo cinco presidentes, dos de ellos provisionales. El PJ reaccionó frente a su renuncia como si fuera un triunfo electoral. El senador Puerta declinó rápidamente y la Asamblea Legislativa designó por noventa días al gobernador puntano Rodríguez Saá, lo cual fue fruto del acuerdo de un sector del PJ. Se convocó a elecciones luego de ese lapso a través del sistema de lemas, no autorizado por la Constitución Nacional, lo cual trasladaba al centro del poder la irresolución partidaria interna. Se formó un gobierno con dirigentes de tercera línea, incompleto y plagado de personas cuestionadas; se puso en marcha un programa que ratificó la convertibilidad, con la promesa de una amplia emisión cuasimonetaria para enfrentar la recesión y con respuestas demagógicas a todos los sectores demandantes. Ante el retiro del apoyo de los principales dirigentes del PJ y una movilización popular de rechazo a los miembros del gobierno, Rodríguez Saá renunció en uno de los sainetes demostrativos de la forma casi autista de reacción de algunos líderes políticos frente a circunstancias abrumadamente críticas: una persona

que se creyó Perón, que no era Perón, que no había recibido los votos que recibió Perón, que asumía en el momento más difícil de la economía argentina, con una debilidad política de iguales proporciones a su entusiasmo populista.

3. El presidente Duhalde fue electo por la Asamblea Legislativa por dos años, fruto del acuerdo entre una parte importante del PJ y el sector alfonsinista de la UCR, que ofrece menos cuestionamiento al actual gobierno que al suyo propio. Los dos vicepresidentes de Menem (Duhalde y el canciller Ruckauf) son las principales figuras de la administración: gran paradoja y enorme pragmatismo, quienes acompañaron al líder de la convertibilidad se transformaron en los sepultureros de aquel régimen. La estrategia en marcha se llama “pesificación” y la disputa entre los sectores fue la paridad de la conversión. La decisión del gobierno, después de anuncios fallidos y contramarchas groseras fue, por un lado, convertir todas las deudas en dólares a pesos en la relación uno a uno, sin distinguir personas físicas de empresas, ni pequeños de grandes deudores; y, por otro lado, convertir todos los depósitos en dólares a pesos a la relación uno a uno con cuarenta, la nueva paridad oficial. La diferencia que deberá financiar de una forma u otra el estado no fue oficializada, pero estimaciones periódicas la ubican cerca de los 20.000 millones de pesos. Además, el gobierno liberó el mercado cambiario.

4. El mito fundador de la nueva alianza gubernamental es la pretensión por expresar al país productivo que se enfrenta al sistema de valorización financiera y de rentabilidad de los servicios públicos privatizados, que predominó desde la administración menemista.

La licuación de los pasivos de los grandes grupos económicos a partir de la pesificación de las deudas a un peso por cada dólar, en circunstancias que la asemejan con lo realizado por la dictadura militar en 1982, no es precisamente una muestra de

confrontación con los ganadores de la etapa previa. Tampoco aparecen aún instrumentos fiscales para redistribuir la ganancia extraordinaria que comenzará a percibir el sector exportador. Como en el pasado, el caos económico es escenario de especulación y ganancia para los sectores más poderosos, que logran transferir su endeudamiento al conjunto de la sociedad y a las futuras generaciones. La mano derecha del estado, tal el término acuñado por el recientemente fallecido Pierre Bourdieu, otra vez demuestra su pericia para atender los reclamos de los propietarios del capital concentrado.

5. Argentina vive una nueva crisis orgánica, una crisis de hegemonía. La lógica de rapiña del funcionamiento histórico del capitalismo vernáculo donde las ganancias de corto plazo y los negocios de ocasión sepultan toda proyección para estructurar un país para todos, se repite como la conducta paradigmática de sus clases dominantes con la connivencia y/o la incapacidad del poder político para colocar límites. La alianza entre los dos principales partidos políticos no confronta con los intereses particulares de los más poderosos, que no son generalizables al conjunto social.

Estos años y esta crisis entregaron una nueva evidencia de que, a diferencia del pasado, la democracia es vista por el *establishment* como inofensiva para afectar sus intereses. No existe tensión insostenible entre las actuales condiciones del régimen democrático y el mantenimiento de intereses contrarios con el bienestar de las mayorías. La democracia argentina se encuentra impotente para resolver la consolidación de una sociedad injusta.

6. A la vez causa y resultado, el Estado se cuenta incapaz. Desprovisto de intervenciones directas, un escenario dominado por reformas orientadas al mercado requiere la reconstrucción de la capacidad regulatoria del Estado, tanto respecto de la redistribución progresiva del ingreso, de la protección de los consumidores, de la se-

guridad social de la población y, fundamentalmente, del disciplinamiento de los sectores más concentrados del capital.

7. La disfuncionalidad del mercado formal de trabajo ha puesto en crisis el régimen de protección social argentino. El esquema de base corporativa y contributiva sobreviviente expresa una sociedad del pasado, donde los riesgos sociales se presentaban una vez que las personas abandonaban la vida activa, en tanto los bolsones de informalidad y desprotección eran atendidos por instituciones de asistencia social. Al modificarse radicalmente esta relación entre trabajadores formales e informales, y la presencia de vastos contingentes de desempleados, los arreglos institucionales existentes expresan, por un lado, un gasto público social alto para los parámetros regionales (cerca del 20% PIB), en tanto los sistemas de cobertura frente a los riesgos sociales continúan respondiendo a la deprimida sociedad de empleo protegido. La década pasada dejó una estructura económica incapaz de entregar empleo de calidad, en tanto las políticas sociales no se adaptaron a la nueva realidad. Una deuda más de la democracia con los menos favorecidos. La propuesta de presupuesto nacional para el ejercicio actual presenta un esquema de protección social mínimo y focalizado, que ya probó su inadecuación para responder a las necesidades de amplios colectivos con ingresos bajos o sin ellos que, además, quedan nuevamente en seria desventaja respecto del aumento de los precios registrado a partir de la devaluación monetaria. La mano izquierda del Estado, Bourdieu *dixit*, muestra nuevamente su torpeza.

8. Otro gobierno radical debió dejar anticipadamente el poder. No es novedoso ni para este partido ni para la política argentina¹. Muchos nos preguntamos si la Argentina es gobernable sin el PJ en el poder. Haciendo la analogía de la teoría de los juegos, De Ipola y Portantiero expusieron la noción de las reglas constitutivas y las

reglas normativas del juego de la democracia². Las primeras hacen referencia a cuáles permiten que el juego efectivamente se desarrolle, y las segundas señalan el conjunto de reglas que permiten a cada jugador sacar ventajas de su mayor pericia y habilidad. Cuando ambas no son debidamente entendidas en su naturaleza, el juego sencillamente no es posible. Y el PJ en la oposición expresa una voluntad y un apetito de poder que devora la distinción entre ambos tipos de condiciones.

La democracia argentina, luego del triunfo de la Alianza en 1997, despojó los fantasmas respecto de la conformación de un régimen político de partido hegemónico. Sin embargo, el PJ vuelve a reaparecer -en la percepción general y en los factores de poder- como el único partido que puede hacerse cargo del gobierno con eficacia.

Argentina vive una crisis orgánica. La lógica de rapiña es la conducta eje de las elites, con la connivencia e incapacidad del poder político para colocar límites. Las mínimas condiciones de vida están amenazadas, mientras sobrevive la capacidad de crear ganancias extraordinarias en los sectores privilegiados.



1 Desde la primera insurrección militar al orden constitucional en 1930 hasta 1983, cuando se estabiliza el régimen democrático, ni los gobiernos electos ni los regímenes militares que los derrocaban completaron sus mandatos, con algunas excepciones. La inestabilidad política fue la regla durante ese lapso. Una interpretación de este fenómeno y su relación con el caos económico puede encontrarse en Jorge Sábato y Jorge Schvarzer, 1985, "Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia", en Rouquié y Schvarzer, compiladores, *¿Cómo renacen las democracias?*, Emecé, Buenos Aires.

2 Emilio de Ipola y Juan Carlos Portantiero, 1984, "Crisis social y pacto democrático", en *Punto de Vista*, Buenos Aires.

9. Pese a la crisis de legitimación de los partidos políticos, éstos han sido los canales de acceso para la ocupación de los puestos electivos fundamentales de la república. Los cuatro presidentes electos de esta pobre democracia fueron dirigentes de extracción partidaria tradicional, característica que domina la sucesión presidencial ocurrida desde el 20 de diciembre último. Un contraste con procesos que culminaron en la elección de mandatarios en algunos países vecinos (Fujimori y Toledo en Perú, Bucaram en Ecuador, Collor de Mello en Brasil) permite entender que fenómenos de esa naturaleza, donde los partidos prácticamente se crean y ordenan en derredor de una figura potencialmente atractiva, no está presente en la política argentina. Si bien la crisis está instalada, no implica desconocer la fortaleza exhibida por los partidos políticos como principales promotores de los liderazgos.

El interrogante se orienta respecto a si esta coyuntura particular de cuestionamiento extremo producirá un movimiento de transformación radical del sistema de representación, o bien si esa fortaleza exhibida es capaz de recomponer las estructuras que han dominado la política argentina hasta el presente.

10. Se prefiguran nuevos actores políticos que rechazan las representaciones actuales. Por una parte, los llamados “piqueteros”, personas con una débil inserción en el mercado laboral, cuya metodología de protesta es el corte de carreteras y puentes, y llevan varios años de ejercicio de cuestionamiento a la política económica de destrucción de empleos. Ante la ausencia de lugares de producción, la visibilidad del reclamo se traslada a las vías de circulación de mercancías y personas, y ha dado origen a formas de organización tanto para la captura de prestaciones de programas sociales, en especial de empleo y alimentación, como para la formación de un sector que reclama reconocimiento con éxito -y es convocado al diálogo institucional-. Por primera

vez una de las tres centrales obreras ha levantado la cuestión del seguro de desempleo para todos los jefes de hogar.

Por otro lado, el movimiento de protesta de los sectores medios empobrecidos y/o afectados por la inmovilización de los ahorros en el sistema financiero, a través de la organización de cacerolazos, asambleas barriales y movilizaciones, es una práctica novedosa, cuyo epicentro en la ciudad de Buenos Aires le otorga visibilidad y potencia. Las demandas expresan motivaciones de orden particularista (por ejemplo, la devolución de los depósitos en dólares en esa moneda que no es precisamente un acto de confianza en el país) y otro conjunto de carácter más general: renuncia de la Corte Suprema de Justicia, cambio total en la dirigencia política, rechazo frente al despojo de la última década. Los integrantes y las demandas del movimiento aún se confunden. Aquello que nació como una reacción espontánea está gestando, en su propio ejercicio, un proceso de organización a nivel barrial diferente al existente, cuyo devenir forma parte de un gran interrogante. Una categoría política como la de “vecino” que en muchas ocasiones de la historia argentina tuvo una connotación reaccionaria, en especial a través de las intenciones de formar apoyo y sucesión política por parte de los gobiernos militares, se ha convertido paulatinamente en un sujeto de confrontación frente a las identidades partidarias existentes, la dirigencia actual y a los representantes del poder económico. Ambos son agentes de cambio cuya potencialidad es todavía insospechada, ya sea como germen de nuevas identidades o como masa disponible para instrumentalizar nuevas aventuras políticas.

11. Otro elemento que colaboró en este estado de crisis de la representación es la prédica antipolítica y antipartidaria que expresan los voceros de los grupos asociados al poder económico. Ocurre algo peligroso: ocupar un cargo público es sinónimo de corrupción y la percepción general co-

loca a la propia actividad política en situación de sospecha. Esta influencia es realizada por una especie de “Partido de los Negocios”, dedicado al desprestigio permanente de la dirigencia política tradicional³ quienes, por su parte, han contribuido con su comportamiento a la estrategia. Un capitalismo de rapiña cultiva una democracia pobre.

Final abierto

Es difícil aventurar un pronóstico respecto de qué va a pasar en la Argentina en un futuro inmediato. Algunas consecuencias de esta crisis son altamente probables. La más dramática es el descenso aún mayor del nivel de vida de la población, dado el aumento del costo de vida, la caída de la actividad económica, el consecuente descenso de los ingresos laborales y la falta de medidas adecuadas de protección de la población. Algunas estimaciones extraoficiales ubican el desempleo por encima del 20% en este momento.

La suerte del gobierno está atada al precio que asuma el dólar en los próximos días. Si bien las reservas oficiales de divisas son cuantiosas para frenar una corrida, es meramente declarativo el apoyo financiero internacional. Un llamado a elecciones en los próximos meses es el latiguillo que exhiben algunos de los líderes del propio PJ para superar la crisis de legitimidad que el gobierno confunde con la mayoría parlamentaria que lo sostiene.

La claudicación del gobierno al licuar los pasivos dolarizados de los grupos económicos concentrados expresa la incapacidad de los

partidos políticos tradicionales para disciplinar los intereses particulares en función del interés general y de un proyecto de democracia incluyente. Las condiciones de vida de amplios sectores sociales y de muchas regiones del país están amenazadas, mientras sobrevive la capacidad de realización de ganancias extraordinarias de los sectores privilegiados. La vocación del gobierno por enunciar el “país productivo” aparece como una forma solapada de favorecer a la dimensión productiva de grupos económicos diversificados en diferentes actividades. En qué medida este nuevo escenario mejorará la posición de las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo e ingresos para la población, es una pregunta cuya respuesta depende del rol que aspire a desempeñar el estado a través de políticas activas.

La tolerancia ante la injusticia reinante está llegando a un punto límite. La sociedad argentina se encuentra en un estado de rebeldía extraordinario y cuestiona movilizadora a las instituciones políticas (a los tres poderes del estado, a las organizaciones partidarias y a la dirigencia sindical tradicional) y a las entidades financieras. El ejercicio de una democracia directa señala más preguntas que respuestas sobre el futuro del sistema político argentino. Inclusive, por primera vez en muchos años renacieron rumores sobre amenazas autoritarias como forma de retornar al orden perturbado por este estado de movilización popular. En un país donde se transformó el estado, la economía y la sociedad, el sistema de representación política ha mostrado cierta estabilidad y la sensación es que este es un punto de inflexión también para las estructuras políticas que dominaron la política argentina durante buena parte del siglo XX.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2002

³ Ricardo Sidicaro, 2001, *La crisis del estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, p. 100 y subs.